

## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/32075, 184/32076  
184/32079

13/01/2021

80656, 80657  
80667

**AUTOR/A:** LÓPEZ ÁLVAREZ, María Teresa (GVOX); ROMERO VILCHES, María de los Reyes (GVOX); DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, Patricia (GVOX); NEVADO DEL CAMPO, María Magdalena (GVOX)

### RESPUESTA:

En relación con las preguntas de referencia, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se reitera en la respuesta enviada para las iniciativas parlamentarias con números de registro 36501, 36502, 36503.

No obstante, sobre las consideraciones que se hacen en el preámbulo a las preguntas escritas acerca de la presunción de inocencia, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha de rechazar contundentemente, por carecer de base fáctica y jurídica, la afirmación de que “El tuit de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incumple flagrantemente todas las antedichas prescripciones normativas y jurisprudenciales en torno a la presunción de inocencia”, y, por ende, los motivos que añade a continuación.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia es el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal a ser tratada como si fuese inocente, hasta que se dicte una sentencia firme. Constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los estados democráticos, garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, y recogido en los tratados internacionales de derechos humanos: en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), artículo 11.1; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 14.2; en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), artículo 6.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), artículo 8.2; en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul, 1981), artículo 7 b).

Su dimensión política y mediática ha sido desarrollada en la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece



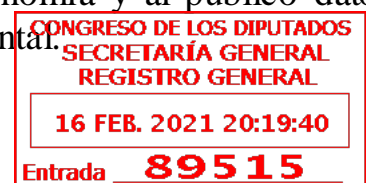
el deber de las autoridades de evitar, cuando se ofrece información sobre un proceso, presentar al sospechoso o acusado como culpable. Su alto nivel de protección motivó la reciente condena a Bulgaria por el TEDH, caso Maslarova, de 31 de enero de 2019, con motivo de unas declaraciones realizadas por un portavoz de la Fiscalía en un asunto en fase de investigación, incluyendo el nombre y datos personales del inculpado.

La misma Directiva establece que ello no impide a las autoridades públicas divulgar información sobre el proceso penal cuando sea necesario por motivos relacionados con la investigación penal o el interés público.

Es en este marco del derecho a la información veraz, reconocido también como derecho fundamental en el art. 20 de la Constitución Española y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, y pilar de todo estado democrático, donde se desarrolla en términos estrictamente legales y constitucionales el ejercicio de las funciones que atribuye a la Delegación del Gobierno contra la violencia de género el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, en particular la función de la recogida y posterior difusión de datos sobre casos de víctimas mortales como consecuencia de la violencia de género. En términos tan estrictos y exquisitos como los datos del Ministerio del Interior sobre las denuncias, y los datos divulgados por la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial sobre procedimientos en trámite. Nunca, en los tuits referidos, ni en ninguna estadística ni documento oficial, se revela la identidad del presunto asesino machista, por lo que en ningún caso la información puede afectar, como se afirma, al derecho a la presunción de inocencia, ni en su vertiente procesal ni en su vertiente informativa.

En segundo lugar, el derecho a la información veraz comprende su difusión por cualquier medio de expresión, entre ellos los medios de comunicación y también las redes sociales.

Las funciones estadísticas que desempeña la Delegación del Gobierno contra la violencia de género relativas a “la realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con todas las formas de violencia contra la mujer, y al diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información sobre la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra la mujer”, se realizan en el marco de lo establecido en los artículos 10 y 11 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que establecen la obligación de recogida de datos estadísticos detallados sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia contra las mujeres y la difusión de los mismos. Conforme a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas, las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental.





En cumplimiento de sus funciones la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge y difunde datos sobre mujeres y menores asesinados como consecuencia de la violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a través de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer que, a su vez, recaban los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Autoridades Judiciales. Las operaciones estadísticas de las que es responsable están incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020 y han sido dictaminadas con informes favorables por el Pleno del Consejo Superior de Estadística.

Con base en la información que remiten las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer, a su vez obtenida de la información policial oficial que se facilita sobre el caso, se determina si se trata de un “caso confirmado” de violencia de género, o se mantiene como “caso en investigación” cuando hay extremos dudosos o falta de información relevante a efectos estadísticos.

Los datos sobre mujeres y menores asesinados como consecuencia de la violencia de género se difunden, además de en el Portal Estadístico y en la página web de la Delegación, en su cuenta de Twitter, cuenta que se abrió en 2017.

A mayor abundamiento, los datos publicados en la estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género tienen carácter provisional -así se indica en la ficha estadística- y tras las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la instrucción y enjuiciamiento de los hechos por el Poder Judicial pueden excluirse casos confirmados previamente porque se acuerde el sobreseimiento o se dicte una sentencia absolutoria, o, por el contrario, incluirse casos no incluidos con anterioridad cuando se dicta sentencia condenatoria. Esta labor de revisión y actualización de las estadísticas de víctimas mortales se consensua de forma armonizada con el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, así como con la Fiscalía, quienes también recogen y difunden datos al respecto. El propio Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recibe de los órganos judiciales fichas de comunicación por muerte violenta por violencia de género sin que haya recaído todavía sentencia condenatoria.

El procedimiento interno para la confirmación de un caso de violencia de género con resultado de muerte está publicado en la web de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género:

<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/unidades/home.htm>



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa convenientemente de las actualizaciones realizadas reflejándolas en los correspondientes instrumentos de difusión.

En suma, la confirmación de un presunto caso de víctima mortal como consecuencia de la violencia de género se realiza a efectos estadísticos e informativos, y en los tuits referidos solo se hace referencia al caso, y nunca al sospechoso como presunto culpable, cumpliendo exquisitamente la normativa nacional e internacional expuesta, ya que no se divulgan datos personales, ni de las víctimas ni de los agresores, que permitan la identificación de los mismos. Es por ello que en ningún caso de esta actuación puede derivarse lesión al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ni por ende daño moral alguno.

En cuanto a la administración de las redes sociales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y del Ministerio de Igualdad se informa que de conformidad con el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, los titulares de los ministerios cuentan con un Gabinete dentro del cual se incardinan las unidades de prensa. Es el personal de esta unidad quien se encarga de la red social Twitter de la Delegación, que no cuenta con equipo de comunicación propio, sino de ese único Gabinete de prensa ministerial.

Madrid, 16 de febrero de 2021